



CLAUDIA SANTIBÁÑEZ VARNERO
Directora Ingeniería Ambiental, Universidad
Andrés Bello

La ilusión de reconstruir rápido

El denominado "Plan de Reconstrucción Nacional" impulsado por el gobierno se presenta como una respuesta ágil frente a las crisis que atraviesa el país. Sin embargo, bajo esa atractiva narrativa de urgencia, subyace una pregunta: ¿reconstrucción a costa de qué territorios y de quiénes?

Reconstruir trasciende la mera edificación de infraestructura; implica restaurar el delicado tejido que une a las comunidades con los ecosistemas que las sostienen. Y es en esa dimensión donde este tipo de propuestas suelen fracasar. La promesa de agilizar permisos y "destrabar" inversiones suena razonable en el papel, pero en contextos de alta fragilidad socioambiental, la velocidad no es neutral: es una toma de posición. Acelerar procesos se traduce, con frecuencia, en eludir la evaluación de impacto ambiental, marginar la participación ciudadana y sobrepasar la capacidad de carga de los entornos naturales. No estamos ante un ajuste técnico, sino ante una reconfiguración en la distribución del riesgo y el poder.

Chile conoce este patrón. Las zonas de sacrificio, la crisis hídrica y la expansión de actividades en ecosistemas frágiles han demostrado empíricamente que los costos del deterioro ambiental nunca se reparten de forma equitativa. Son las comunidades rurales y periféricas las que terminan perdiendo sus medios de vida y absorbiendo los impactos de decisiones tomadas a kilómetros de sus realidades. Una reconstrucción que arrasa con el entorno natural para levantar cemento no reconstruye: simplemente redistribuye y profundiza los daños sociales.

A este escenario se suma una ceguera inexcusable: la crisis climática. Chile no enfrenta emergencias aisladas, sino una transformación estructural marcada por la megasequía, el aumento de incendios forestales y la pérdida acelerada de biodiversidad. Reconstruir dando la espalda a los criterios de adaptación climática y resiliencia ecosistémica no solo es ineficiente; es una irresponsabilidad intergeneracional. El desafío no radica en pavimentar más rápido, sino en hacerlo mejor: protegiendo humedales, integrando soluciones basadas en la naturaleza y proyectando una planificación territorial que entienda que un medio ambiente sano es nuestra principal barrera de defensa. La gobernanza es otro foco de alarma. Las leyes misceláneas tienden a centralizar decisiones y asfixiar los espacios de deliberación local, ignorando el conocimiento vital que las comunidades tienen sobre su propio entorno. La evidencia es categórica: los proyectos que se imponen sin participación temprana y sin respeto por las dinámicas ecológicas locales enfrentan mayores niveles de judicialización y conflicto socioambiental. Lo que hoy se disfraza de eficiencia termina engendrando lo contrario.

En el fondo, este debate trasciende la discusión sobre un cuerpo legal; es un cuestionamiento directo a nuestro modelo de desarrollo. ¿Buscamos reconstruir para aferrarnos a un sistema que depreda la naturaleza y nos hace más vulnerables, o para transitar hacia un paradigma justo y sostenible? La primera ruta es innegablemente más rápida a corto plazo; la segunda es más exigente, pero duradera.

Toda política pública en esta materia debe responder con honestidad a una disyuntiva final: ¿estamos resolviendo las crisis socioambientales o simplemente desplazando la devastación en el tiempo y la geografía? Si es lo segundo, abandonemos la ilusión: no estamos reconstruyendo, estamos pavimentando el camino hacia el colapso.